



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0074/2017

FECHA: 30 de mayo de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0074/2017 presentada por [REDACTED] el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han motivado la presente reclamación pueden sistematizarse como sigue.
  - Por escrito de 9 de enero de 2017, el ahora reclamante remitió una solicitud de resolución de reclamación relacionada con el suministro de electricidad a la Consejería de Economía Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid en la que, tras exponer que se había dado de baja el suministro de energía eléctrica de un inmueble que había heredado, solicita que
    - o “Se averigüe la identidad del responsable del acto de baja, con qué fin lo ha hecho y si ha utilizado la identidad del titular porque lo ha hecho a fin de exigirle la responsabilidad. Que IBERDROLA no participe y denuncie los hechos a las autoridades o la policía porque el fallecido no puede darse de baja estando fallecido. Si IBERDROLA no lo hace debe hacerlo esta Dirección General. Como coheredero estoy legitimado a recibir información. Se reconozca mi legitimación como heredero para perseguir uso indebido nombre de mi tío”.

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



- A través de un escrito de 17 de enero de 2017 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid se traslada al ahora reclamante lo siguiente:
  - o *Estudiada la documentación aportada se ha comprobado que se trata de un contrato celebrado en régimen de libre mercado con una comercializadora de electricidad y no de un contrato de suministro a tarifa de último recurso de acceso a las redes.*
  - o *De acuerdo con lo previsto en el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Dirección General carece de competencia para resolver sobre la reclamación planteada. La resolución de las discrepancias que se susciten en relación con los contratos celebrados en régimen de libre mercado, o con las facturaciones derivadas de los mismos, así como la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados corresponde a la jurisdicción ordinaria, pudiendo acudir como alternativa, si lo aceptan voluntariamente las partes, a procedimientos de mediación o arbitraje.*
  - o *Asimismo, se pone en su conocimiento, por una parte, que en caso de ostentar la condición de consumidor según la Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid puede dirigirse a la Dirección General de Consumo y, por otra parte, se indica la existencia de los servicios de Orientación Jurídica de la Comunidad de Madrid, donde pueden asesorarle de forma gratuita del modo de efectuar una demanda judicial.*
- Posteriormente, el actor remite un nuevo escrito a la Dirección General de Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, con fecha de 1 de febrero de 2017, en el que, con relación a la calificación del tipo del contrato de suministro efectuado en el escrito de la indicada Dirección General reseñado en el párrafo anterior, se indica que *“esta información no es cierta porque mi tío si disponía de Tarifa Último Recurso ahora cambiada por la legislación a PVPC (Todas las Tarifas Último Recurso han pasado por ley a PVPC). Que no se trata de mi palabra contra la del Técnico del Área Administrativa y Jurídica que hace la afirmación sino que existe un contrato para comprobarlo y en concreto el CUPS (Código Único de Punto de Suministro), que es una fuente de contraste y que en el modelo de carta enviado el CUPS tiene su campo y no se ha cumplimentado”*. De este modo, concluye su escrito solicitando *“Ser informado por parte de esta Dirección general de Energía y minas de los supuestos datos y documentos, con copia de los mismos, que han manejado para afirmar que el contrato de suministro de electricidad de la vivienda calle [...], dado de baja con posible suplantación de identidad del titular fallecido no era de Tarifa Último Recurso (ahora PVPC) cuando la realidad es que si lo era, y en concreto de la numeración CUPS (Código*



*Universal de Punto de Suministro) que supuestamente han manejado y que no ha expresado en el campo correspondiente de su carta”.*

- A continuación, por escrito de 4 de febrero de 2017, [REDACTED] interpone un recurso potestativo de reposición frente al escrito de la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el que se solicita su anulación y que “se reponga el estado del piso del que soy copropietario al estado que tenía con luz y suministro [...] en definitiva se reponga el suministro eléctrico en la vivienda referida”.
  - Mediante escrito de 15 de febrero de 2017, la precitada Dirección General de la Comunidad de Madrid remite contestación al escrito aludido en el párrafo anterior poniendo de manifiesto lo siguiente:
    - o Debe aclararse que en la respuesta remitida el pasado 31 de enero de 2017 se cometieron dos errores: citar un número de expediente erróneo y afirmar que si se trataba de un contrato de suministro a tarifa de último recurso no se estaba ante un contrato celebrado en libre mercado. El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica establece en su artículo 5.1. que “A todos los efectos, los consumidores acogidos a tarifa de último recurso serán considerados como consumidores en el mercado liberalizado”.
    - o Tal y como se indicó correctamente en nuestro anterior escrito, la Dirección General es competente sólo de aquellas reclamaciones relacionadas con contratos de suministro a tarifa o de acceso a las redes o con las facturaciones derivadas de los mismos, es decir, con las compañías distribuidoras (artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre). Tras la separación de las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica y la plena liberalización de esta última actividad. Completada con la extinción de los contratos de suministro a tarifa el día 30 de junio de 2009, esta Dirección General carece de competencia para resolver las reclamaciones o discrepancias surgidas entre los consumidores de energía eléctrica y las compañías comercializadoras de electricidad.
  - Finalmente, por escrito registrado en esta Institución el 1 de marzo de 2017, [REDACTED] plantea una reclamación frente a la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de 15 de febrero de 2017, anteriormente reseñada.
2. El mismo 1 de marzo, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.



Por escrito registrado en esta Institución el 15 de marzo de 2017 de la Subdirección General de Análisis y Organización de la Consejería de referencia, se traslada escrito de observaciones elaborado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en el que se pone de manifiesto lo siguiente:

- *El 23 de febrero de 2017 se informa al ahora reclamante que, por error, se indicó que su contrato no era un contrato de tarifa de último recurso cuando lo correcto hubiera sido indicarle que el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece en su artículo 5.1. que “A todos los efectos, los consumidores acogidos a tarifa de último recurso serán considerados como consumidores en el mercado liberalizado”. Asimismo, se le informa que se desconoce el número de CUPS porque no fue informado ese dato por el interesado en su solicitud no se han entendido las actuaciones con las compañías distribuidora y comercializadora, al carecer de competencia para resolver sobre la solicitud.*
- *La información solicitada no obra en poder de la Dirección General de Industria. A la vista de la originaria solicitud de acceso planteada el 9 de enero de 2017, las cuestiones se encuentran fuera del ámbito competencial de esta Dirección General la cual tan sólo es competente para conocer de las reclamaciones relativas al contrato de acceso suscrito con la empresa distribuidora y no del contrato suscrito entre el cliente y la comercializadora.*

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto “salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

*“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y*



*por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).*

*2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.*

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24* de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, en primer lugar debemos delimitar el objeto de la pretensión que motiva la presente reclamación. A tenor de los antecedentes en el expediente, se trata de identificar la identidad del responsable de haber dado de baja un contrato de suministro eléctrico de una vivienda que, indica el ahora reclamante, es coheredero.

Determinado el objeto de la pretensión que origina la presente Reclamación cabe recordar que, a tenor del preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno –desde ahora, LTAIBG-, la misma tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollados por aquella norma. Por su parte, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como los “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hay sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

En función de estos preceptos, en definitiva, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en





el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisitos de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley.

4. De acuerdo con la premisa acabada de reseñar, y en atención a lo manifestado por la administración autonómica en sus alegaciones, la misma no dispone de la información solicitada en tanto y cuanto carece de competencias ejecutivas con relación a las relaciones trabadas entre los consumidores y la empresa comercializadora de energía eléctrica. Esto es, entre el cliente y la empresa comercializadora, en función de lo previsto en el aludido artículo 98 del real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. En atención a lo expuesto procese, en consecuencia, desestimar la reclamación planteada en tanto y cuanto la administración autonómica no tiene la información solicitada y, en consecuencia, no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública en los términos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación presentada, en tanto que no existe objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez

